

Walther L. Bernecker/Rüdiger Zoller

## **¿Transformaciones políticas y sociales a través de elites?**

### **Algunas reflexiones sobre casos latinoamericanos**

Al plantearse la pregunta si los cambios políticos, sociales, económicos y culturales han sido realizados en América Latina a través de las elites allí residentes, este cuestionamiento requiere urgentemente un signo de interrogación. Ello se debe a que desde la independencia de las colonias españolas y portuguesas en las primeras décadas del siglo XIX, la relación entre las elites blancas locales, es decir los criollos, y el cambio político siempre ha sido muy ambivalente: pues si bien estas elites criollas querían deshacerse definitivamente, después de tres siglos, del tutelaje ejercido por Madrid y Lisboa, para poder disponer ellas mismas de los recursos económicos y las supuestas riquezas del subcontinente, al mismo tiempo no querían poner a disposición su propia posición privilegiada frente a la población indígena y menos con respecto a los esclavos africanos que se siguieron importando hasta mediados del siglo XIX. La independencia de los Estados de lo que hoy se llama América Latina no significó, pues, una revolución social, sino que, muy al contrario, iba dirigida a fortalecer las relaciones sociales existentes y los privilegios de las elites. Para las nuevas constituciones nacionales se tomaron como modelos los textos revolucionarios procedentes de París y Filadelfia, y casi todos los nuevos Estados independientes (exceptuando el Brasil y, por algún tiempo, México) se establecieron como repúblicas, pero en cierta manera eran repúblicas sin ciudadanos. La *égalité* sólo era válida para muy pocos miembros de estas nuevas sociedades. La clase dirigente de los criollos perpetuó consecuentemente su presunto derecho a ejercer el poder, estableció el dominio más o menos definitivo de su clase en toda una serie de guerras civiles a lo largo del siglo XIX, pero jamás permitió que se pusiera en duda su aspiración de poder por parte de las capas inferiores de la sociedad.

Desde un principio, debe estar claro que al hablar de elites, esta expresión va referida a las respectivas elites de poder y las elites funcionales (Wasner 2004: 15-22). “The functional elites have remained political elites” (Scott 1967: 120) En la bibliografía especializada sobre el tema, actualmente no existe una definición aceptada por todos los científicos de “elite”, por último un término vago y polifacético. Resulta conveniente resaltar, desde un principio, este déficit, que tampoco puede ser subsanado en el presente artículo.

### 1. Una retrospectiva histórica

El término elite se usará, en el contexto del presente ensayo, siempre en plural, pues en el siglo XIX, las elites de los nuevos Estados latinoamericanos todavía se vieron obligadas a actuar, en la mayoría de los casos, a nivel local o regional; en las primeras décadas después de la independencia aún no podían ejercer directamente el poder en todo el territorio de México, del Brasil o de Argentina. El control de todo el territorio nacional lo obtendrán las elites en México y Argentina en las últimas décadas del siglo XIX, después de la construcción de los ferrocarriles, y en el caso del Brasil no lo conseguirán hasta los años sesenta del siglo XX, haciendo un uso combinado de los transportes aéreos y la televisión. Por lo tanto, en América Latina elites hasta hoy siguen siendo coaliciones de elites que sólo a través de uniones pueden disponer de los necesarios recursos de poder. Pero en su misma existencia se expresa *per definitionem* la desigualdad social, imperante en el subcontinente latinoamericano.

Las elites criollas latinoamericanas se diferenciaban de la gran masa de la población no sólo por sus funciones sociales y el ejercicio del poder, sino en primer lugar por el control de los recursos económicos de “su” país, por sus ingresos y sus riquezas. La extrema concentración de la riqueza en manos de muy pocos sigue diferenciando hasta hoy a (casi) todos los países latinoamericanos de las sociedades europeas y también de las asiáticas. Y esta concentración de la riqueza forma parte, hasta el día de hoy, de la *success story* de las elites de poder. Al mismo tiempo, es una de las causas de las continuas crisis económicas y sociales y del relativo subdesarrollo de los países de América Latina.

Estas elites se auto-definieron desde un principio como modernas; incluso se entendían como los modernizadores por excelencia de sus respectivos países. Eran “liberales”, masones y positivistas, y se tomaban como ejemplo ciudades como París, Londres, más tarde Nueva York –centros culturales a donde enviaban a sus hijos a estudiar. Tanto sus discursos como su auto-imagen siempre estaban a la altura de la modernidad, continuamente insistían en su deseo de hacer progresar su país. Importaban de las metrópolis europeas y más tarde estadounidenses las normas de lo que entendían por desarrollo económico y sus propios comportamientos de consumo. En el siglo XIX, este comportamiento concordaba a la perfección con el aniquilamiento físico de los indígenas o con el mantenimiento de la esclavitud en el Brasil hasta 1888. Pues transformaciones demasiado rápidas siempre fueron interpretadas por las elites como un factor de inseguridad.

A pesar de todas las “revoluciones” nominales en la cúspide de la pirámide de poder, en América Latina prevaleció una extraordinaria continuidad estructural. Mientras que en Europa y algo más tarde en los Estados Unidos la industrialización “revolucionó” a las sociedades de esos países, las sociedades latinoamericanas siguieron siendo en primer lugar agrarias. Esta fue una de las principales causas por las que América Latina en su totalidad se desligó en el siglo XIX del desarrollo industrial europeo y estadounidense. Apenas tuvo lugar una transformación social, ésta más bien fue frenada desde arriba.

Las elites latinoamericanas estaban orientadas, de manera extrema, hacia el exterior no sólo en cuanto a su discurso, sino también desde el punto de vista económico. Tenían asegurado su porvenir económico por medio de la inclusión en el informal imperio británico y más tarde a través de su conexión como suministradores de materias primas a los Estados Unidos. Como ya fue el caso en la época colonial, los países latinoamericanos permanecieron integrados en la economía mundial como suministradores de productos agrícolas, de materias primas minerales y de otra índole, a lo que en el siglo XX pronto vino a sumarse el petróleo; en la mayoría de los casos, esta integración se realizó a través de monoculturas. Esta inclusión en el mercado mundial proporcionó a las elites permanentemente criterios, que sus propios países no podían cumplir. En cierta manera, la “globalización” ya existía para las elites latinoamericanas en el siglo XIX, aportando sin embargo al

mismo tiempo –ya que estaban dirigidas casi exclusivamente al exterior– problemas en cuanto a la comprensión de sus propias sociedades.

En este contexto, las elites interpretaban el fomento de la inmigración de europeos como parte de una modernización consciente y deseada de sus sociedades. Querían revalorizar sus propias poblaciones, en el sentido más estricto de la palabra querían “blanquearlas” a través de los inmigrantes. Pero junto con éstos vinieron nuevos e inesperados desafíos a la estabilidad de los sistemas políticos y sociales: protestantes y judíos, campesinos y ciudadanos, socialistas y anarquistas de Europa. En cierta manera, existía el peligro inherente de importar unas contra-elites. En los países de inmigración (ante todo en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil) esto requería a medio plazo concesiones políticas, por ejemplo en la Argentina la ampliación del derecho de voto ya a comienzos del siglo XX. En ningún caso, las viejas elites abandonaron el poder completamente, pero a medio plazo tuvieron que cooptar a los nuevos elementos sociales para poder controlarlos. No se puede afirmar lo mismo con respecto a los indígenas, a los mestizos y a los millones de peones agrícolas; la afirmación sólo es válida para las nuevas capas medias urbanas.

Con la crisis económica mundial de 1929, en casi todos los países de Latinoamérica este sistema oligárquico, que había funcionado tan a la perfección por más de cien años, entró definitivamente en crisis. La Primera Guerra Mundial ya había interrumpido por algún tiempo los flujos comerciales con Europa, y después de 1929 los mercados de exportación se derrumbaron de un golpe; además, decayeron los precios y con ellos la entrada de divisas en América Latina. A consecuencia de estos fenómenos, las capas dominantes no pudieron seguir manteniendo sus tradicionales comportamientos de importación. Por otro lado, por la rápida urbanización surgió en los países latinoamericanos una nueva clase media que reclamaba su derecho a participar en el poder. Esta clase media debía, con sus crecientes aspiraciones y expectativas, ser incorporada al prevaleciente sistema social. La respuesta de las elites a este desafío se realizó, desde el punto de vista político, a través de corporativismo y populismo, y desde el punto de vista económico, a través de sustitución de importaciones. Desde los años treinta hasta los años ochenta del siglo XX, ya no primaba exclusivamente la exportación de materias primas, sino que ahora se practicaba también la política de expansión del mercado interno. Además,

se practicó una cooptación política de los nuevos grupos para estabilizar el sistema –un proceso éste, que sufrió muchas rupturas.

En lo que sigue, se presentarán algo más detalladamente estos procesos de ampliación de la participación política y de una industrialización acelerada, tomando como ejemplos concretos México, Brasil y unos países andinos, pero insistiendo al mismo tiempo en la heterogeneidad de los diferentes desarrollos sociales en los respectivos países latinoamericanos. Por muchos paralelismos y por muchas concordancias que haya, hay que insistir en que cada desarrollo nacional tiene sus aspectos específicos y que por lo tanto resulta extremadamente difícil generalizar las conclusiones obtenidas.

## **2. El caso de México**

En cierta manera se podría decir que México ha sido, desde antaño, un país de elites. Hasta hace muy poco, grupos minoritarios han gozado de un virtual monopolio de recursos políticos y económicos, ejerciendo una influencia desproporcionada sobre el proceso de toma de decisiones gubernamentales. La preeminencia de las elites ha sido un reflejo de la estructura autoritaria del poder. Pero cabe preguntarse si el cambio social vivido en México fue producto de la iniciativa de estas elites, o si fueron otros factores los que originaron los cambios.

Desde el siglo XX, la modernización de la sociedad fue uno de los objetivos más claros y consistentes de las minorías en el poder, y el Estado fue su instrumento, aun cuando sus propósitos de cambio provocaron poderosas reacciones de rechazo. Se podría hablar de un desarrollo paradójico, ya que cuanto más se transformaban la sociedad y el Estado, tanto mayor fue la disminución de mecanismos de influencia para las elites asociadas con el Estado. Hoy, aspectos centrales del cambio social no son producto de la iniciativa de las elites y escapan a su control, desarrollándose de manera espontánea de acuerdo con una dinámica autónoma vinculada a las características de una sociedad cada vez más diversa y plural. La activación de las minorías poseedoras de recursos escasos en México a finales del siglo XX, es también una reacción defensiva frente a la sociedad de masas que se ha hecho presente. Las acciones políticas de las minorías poseedoras tienden a recuperar el liderazgo que los cambios en la sociedad le han arrebatado y que históricamente habían ejercido (Loaeza 2000: 309-311).

“Cambios en la sociedad” se refiere en este contexto a la movilización social de finales del siglo XX, cuando surgió la sociedad de masas, haciendo accesible a muchos la información y los patrones de comportamiento asociados con los presupuestos básicos de una sociedad de mercado. Últimamente, se inició una etapa de política de masas. Estos procesos de cambio minaron la posición de influencia de las elites que con esa liberalización perdieron el privilegio que derivaban en el pasado nada más de la escasez de estos bienes.

Antes y durante casi todo el siglo XX y a lo largo de más de setenta años, las elites políticas mexicanas fueron exitosas en un proceso permanente de adaptación y cooptación social. Junto a los militares victoriosos de la revolución de 1910 (que pronto tuvieron que compartir el poder con elites civiles), junto a los peones agrícolas que de alguna manera fueron neutralizados por el presidente Lázaro Cárdenas que creó la institución de los ejidos, y junto a los trabajadores organizados en el sindicato unitario, fueron ante todo las clases medias urbanas las que fueron integradas, como funcionarios públicos, a la “familia revolucionaria”. En un futuro, los conflictos políticos se dirimirían en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que de hecho se convirtió en un partido de Estado y que ofrecería a las elites en competencia por el poder un marco adecuado para sus luchas internas. El PRI fue (y sigue siendo) también una coalición de intereses con un sistema sofisticado de clientelismo y de patronaje.

Se puede constatar, pues, que en México el reparto de la influencia de las diferentes fracciones de las elites se realizó a lo largo de más de setenta años dentro de las estructuras del PRI (que cambió dos veces de nombre). El éxito de este sistema radicaba en su capacidad de adaptación en cada nuevo sexenio; el cambio del poder institucionalizado en la presidencia del Estado hizo posible una limitada rotación de elites sin pronunciamientos militares o rupturas del sistema. En cierta manera, el PRI encarnaba su propia oposición, si bien en el parlamento siempre había también otros partidos que incluso fueron fomentados explícitamente para sugerir una imagen “democrática” del sistema autoritario (Lehr 1981: 130-182). Con el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una escisión del PRI por la izquierda, y el fortalecimiento del Partido Acción Nacional (PAN), creado ya en 1939, en la derecha del espectro político, los conflictos que hasta entonces habían estado concentrados en el interior del sis-

tema, desde finales de los años ochenta en cierta manera se externalizaron. Una condición previa de este desarrollo fue que el PRI tuviera que aceptar victorias electorales de partidos opositores lo que se concedió al PAN por primera vez en 1989, cuando este partido ganó las elecciones a gobernador en el estado de Baja California Norte.

Las crisis de los años ochenta afectaron de manera muy desigual a las diferentes regiones del país. La desregularización y la regionalización trajeron consigo la formación de elites locales, que cobraron identidad como actores políticos cuando articularon demandas de autonomía frente al poder federal o, dicho de otra manera, frente a las elites nacionales. Los empresarios locales fueron un núcleo de renovación de las elites políticas, que se integraron a la estructura de poder a través de los partidos de oposición, en particular del Partido Acción Nacional (Franke 2004). A estos grupos el debilitamiento del Estado les favoreció.

El pactismo es una de las claves de la historia política mexicana del siglo XX, uno de los pilares del autoritarismo que sirvió a la exclusión de grandes grupos sociales de la negociación política y a la centralización política del país. El primero de estos pactos lo concluyeron las diferentes facciones revolucionarias en 1929 y culminó con la fundación del partido oficial, el posterior PRI. Alan Knight lo expresó así: “Cuando las elites nacionales pactaron en México, lo hicieron en beneficio propio a expensas de las masas y también en beneficio del centro a expensas de las provincias” (Knight 1992: 129).

El conflicto interelitista, que podría ser identificado como catalizador de la democratización, se produjo con el resquebrajamiento del pacto que en 1946 había dado origen al PRI; este pacto no resistió la presión de las elites nuevas, cuya incorporación hasta los años ochenta había sido automática o se había considerado innecesaria. Si antes los empresarios no habían recurrido a la política para defender sus intereses, sino que les bastaba entablar negociaciones directas con la elite gubernamental, a partir de los años ochenta surgió una competencia interna, derivada de discrepancias esenciales en relación con el modelo económico y la organización política del país (Loaeza 2000: 322).

La ruptura entre la elite política y la económica se puede datar con bastante exactitud: ocurrió a raíz de la expropiación de la banca decretada por el presidente López Portillo en septiembre de 1982. Esta decisión provocó el agravamiento de una severa crisis financiera inaugu-

rando una inestabilidad económica sin precedentes. Más importante fue quizá otra consecuencia: generó una gran desconfianza en cuanto a la capacidad de la elite política de defender o promover el interés general, y estos cuestionamientos minaron la posición y la autonomía de las elites nacionales, cuya posición de privilegio a ojos de muchos había perdido su razón de ser.

A partir de 1982 se pueden constatar dos fracturas en el seno de las elites mexicanas: una, que separaba a las elites nacionales de las elites locales o periféricas, que vieron en la expropiación de la banca un ejemplo patente de los abusos del gobierno federal y de la centralización; y la otra, cuando una corriente del PRI se rebeló en contra de las políticas reformistas de los años ochenta y noventa (presidentes De la Madrid, Salinas, Zedillo) pues se sentían desplazados por el debilitamiento del Estado (Hernández Rodríguez 1992).

Estas dos fracturas dieron lugar a las dos formaciones políticas que más contribuyeron a dismantelar la hegemonía del PRI: el Partido Acción Nacional (PAN), vehículo de las elites locales para insertarse en la estructura del poder nacional, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), opuesto a los cambios asociados con las reformas económicas y políticas de los años ochenta.

En cierta manera, se podría formular la respuesta a la pregunta introductoria en un doble sentido: en primer lugar, las transformaciones sociales y económicas de finales del siglo XX tuvieron lugar independientemente de la iniciativa de las elites políticas; y en segundo lugar, estos cambios tuvieron por consecuencia fracturas entre las elites de poder que llevarían, en menos de veinte años, a una democratización del sistema autoritario, desbocando al longevo PRI del poder. La división de la fortaleza de la elite y la presencia amenazante de una sociedad civil mucho más diversa, exigente y consciente de sus derechos, eran procesos convergentes que apuntaban en la dirección de una mayor distribución del poder político y hacia el cambio de régimen.

Consolidada como tal durante el gobierno de Porfirio Díaz, la elite política mexicana ha sido desde entonces un grupo restringido, generalmente homogéneo, que ha ocupado la cúspide de la pirámide social para hacer valederas las decisiones que ha impuesto a las mayorías. Es importante destacar que el rasgo homogéneo de la elite política mexicana está relacionado con la situación de la democracia: a mayor homogeneidad, menos democracia. En la medida en que la heteroge-



neidad se instaló en el seno del grupo, el fenómeno de liberalización política se amplió y el proceso democrático se consolidó.

Los desacuerdos de las elites políticas que han gobernado a México desde el Porfiriato hasta hoy, han dado pie a revoluciones violentas, a regímenes caudillistas o presidencialistas, a grandes transformaciones económicas y sociales, a acuerdos y pactos entre grupos elitistas que conllevaron largos períodos de estabilidad política. Pero ni elites ni clases subalternas lograron establecer en su carrera por el poder las bases y reglas definitivas para la implantación de la democracia. Más bien, acuerdos o pactos entre sí y con otras elites de la coalición triunfante sirvieron para la conservación del régimen, para perpetuar a las elites asentadas en el poder, no para democratizar el régimen.

La ruptura de la elite cambió el escenario político nacional. Se redefinió el espectro de fuerzas políticas; se consolidó la cultura de la competencia electoral; concluyó la hegemonía de un solo partido; creció la popularidad de la democracia; se demostró la necesidad de profundizar las reformas políticas. Los años ochenta expresaron vívidamente el vuelco que había sufrido la sociedad mexicana. Es verdad que ya antes se conocían las más diversas formas de protesta ciudadana, se tenía amplio conocimiento de una cultura opositora y empezaba a arraigar entre los partidos y organizaciones de masas una incipiente cultura civilista. Pero hasta entonces ni las elites ni las masas habían consolidado una cultura de la tolerancia, el diálogo y la concertación.

El acuerdo elitista de 1929, base de la estabilidad política mexicana, fue el instrumento mediante el cual la elite política gobernó el país prácticamente sin fisuras graves hasta 1988; este acuerdo saltó hecho pedazos a causa de la agudización del conflicto intraelitista, entre priístas y panistas por un lado, y entre modernizadores y cardenistas por el otro, abriendo en México una etapa de intensa actividad política. Durante los últimos años se puede observar también “el surgimiento de una nueva elite tecnocrática y una elite de abogados especializados en temas de economía global” (Adler Lomnitz/Gil-Mendieta 2004: 328), con educación cosmopolita, que usa un nuevo tipo de redes sociales.

Ahora bien: la victoria electoral del PAN en el año 2000 no significó una total pérdida de control por parte de las viejas elites priístas, ya que el nuevo presidente, Vicente Fox, no disponía en ninguna de

las dos cámaras del Congreso de una mayoría. Además, 20 de los 32 estados federales seguían siendo gobernados por el PRI, y también el aparato estatal todavía estaba ocupado por simpatizantes y miembros del PRI (Maihold 2000: 129). Esta constelación exigía de todas las partes políticas implicadas unos procesos extremadamente difíciles de adaptación. En la retrospectiva al último sexenio se puede decir que el presidente Vicente Fox (PAN), elegido directamente por sufragio universal, y el PRI, que siguió siendo el partido mayoritario en el parlamento, todavía no han encontrado sus roles definitivos en el nuevo reparto de poder. El primer cambio de elite política tuvo como resultado altos costos transaccionales dentro del y para el sistema político.

El detonante más importante para la pérdida de poder cohesivo del viejo sistema fue el estancamiento económico. Desde el comienzo de la crisis del endeudamiento, en 1982, las elites no tenían qué repartir a través del aparato del Estado; más bien, se sucedieron toda una serie de pactos para restringir cada vez más los costos sociales. A lo largo de todo el proceso de apertura económica y democrática desde mediados de los años ochenta, la desigualdad social fue en aumento, un hecho, por cierto, que ya se pudo constatar durante la fase de crecimiento económico de los años sesenta y setenta (Lehr 1981: 67).

Este proceso de adaptación contribuyó a la competitividad de la economía y por lo tanto al mantenimiento del poder por parte de las elites, pero no ayudó a conseguir un verdadero cambio social o a una distribución más equitativa de la riqueza. Al contrario: las privatizaciones de las empresas estatales en el marco de las reformas estructurales después de la crisis del endeudamiento de 1982 tuvieron como efecto una mayor concentración de la riqueza. Las deudas fueron socializadas, y gran parte de las propiedades estatales (exceptuando el petróleo) fueron privatizadas. Después de décadas de dominio estatal en la economía, los grandes grupos particulares pudieron adentrarse en sectores que hasta entonces les habían estado vedados. Por otro lado, cada político ambicioso dependía, más todavía que antes, de la ayuda financiera de sus “amigos” para sufragar los enormes costos de las campañas electorales. (El hecho que en la campaña electoral del año 2000 se denunciaran públicamente irregularidades por parte de todos los partidos contra la legislación vigente, no impedirá que también en el futuro tenga lugar este tipo de violaciones de la ley.)

La apertura y democratización del sistema político tuvo lugar en México sobre un trasfondo económico en el cual predominaban perdedores. Mientras que en la bibliografía de los años sesenta hasta ochenta del siglo XX se insistía en la importancia de las elites funcionales en la Iglesia y el Ejército, en los sindicatos y en las organizaciones de los trabajadores agrícolas, y el análisis en conceptos de modernización propagaba como modelo un concepto de sociedad que se orientaba en el ejemplo europeo y estadounidense (Lipset/Solari 1967), hoy se puede decir que las convulsiones sociales como consecuencia de la crisis del endeudamiento perjudicaron en primer lugar a las clases medias que (en múltiples sentidos) fueron depravadas. Desde hace más de veinte años, los representantes de las clases medias pierden, en toda América Latina, importancia económica, mientras que por otro lado la representación política ha sido expandida a través de elecciones “auténticas”.

El poder económico logró seguir concentrándose bajo la etiqueta de la apertura, de la privatización y la desregulación. Se eliminó el monopolio de poder político del PRI, pero en el sector económico las “viejas” elites (o las capas altas de la sociedad) pudieron seguir expandiendo su posición bajo el nuevo signo “democrático” y los lemas innovadores de modernización y competencia. En este proceso les ayudó no solamente su cercanía a los detentadores del poder, sino también su mayor nivel de educación y la accesibilidad al capital necesario. Roderick Ai Camp ha analizado y documentado desde hace años de forma muy convincente este “modelo”, específicamente mexicano, para carreras políticas, así como la estrecha interrelación de origen familiar y regional, de formación educativa y profesional, de política de alianzas matrimoniales y de posibilidades de ascenso político (Camp 1992; 1995).

Esta externalización de los conflictos elitistas —es decir, sobrepasando el marco del partido y adentrándose en la sociedad— no ha sido concluida hasta hoy. Pero no habrá una vuelta atrás a las viejas reglas “monopolísticas” del juego. Incluso si el PRI consiguiera recuperar la presidencia en 2006, podría volver a ejercer el poder por seis años, pero no habría alcanzado un monopolio de poder duradero. No se debe sobre-evaluar, pues, el simbolismo de la elección de Vicente Fox en el año 2000, pero también está claro que no se volverá a restituir el monopolio priísta del poder. En la política mexicana ahora actúan elites

(fracciones) que compiten unas con otras y que provienen de diferentes partidos políticos, así como también en la economía existen competencias por sectores. De momento, este proceso todavía no significa una pérdida de control por parte de las elites, pero sí significa que en México han de implementarse nuevas reglas de juego político. Habrá que ver si las elites consiguen esta meta impidiendo al mismo tiempo una redistribución auténtica y sustancial de las riquezas económicas y sociales.

### 3. El caso del Brasil

Lo que el año electoral 2000 significó para México, a saber la (supuesta) ruptura con las viejas elites, parecía tener su equivalente brasileño en los años 2002 y 2003: la victoria electoral del Partido dos Trabalhadores (PT) y la conquista de la presidencia por el trabajador “Lula” da Silva. Este hecho fue celebrado no solamente en el Brasil, sino en todo el mundo como símbolo de un cambio radical. ¿Se puede decir que con este cambio el “pueblo”, o mejor dicho los electores habían forzado realmente el cambio social en el Brasil?

Sin poder emitir un juicio definitivo sobre la presidencia de “Lula” da Silva antes de que haya finalizado su primer período, se puede afirmar ahora ya que su gobierno no significó para el Brasil una revolución ni una ruptura con las viejas estructuras, ni siquiera la realización de reformas sociales que eliminaran parcialmente las estructuras vigentes. Más bien, su gobierno –aunque sí practica toda una serie de reformas parciales– representa en primer lugar continuidad, por lo cual muchos en el Brasil se burlan de él como *Lula light*. Su base parlamentaria en el Senado y el Congreso fue “comprada” durante años en el sentido estricto de la palabra; ya antes de las elecciones de 2002, se garantizó la continuación de la política de estabilización, y los sacrificios financieros no cargaron a las clases altas, sino en primer lugar a las capas medias. Un rastreo por la historia del Brasil muestra por qué se llegó a esta política a la cual quizá no haya alternativa.

Desde la independencia, el cambio político y social fue realizado en el Brasil por sus elites. Por unos dos siglos, se puede hablar de una *success story* de estas elites, y al mismo tiempo de una historia exitosa para el desarrollo del país en su totalidad. Pero por otro lado, también es la historia de una continua exclusión social (*exclusão social*), de

proporciones apenas comparables con otros países. Por lo tanto, el Brasil en cierta manera es un ejemplo clásico de “cambio a través de elites”, o más exactamente: de cambio a través de elites tradicionales (Bernecker/Pietschmann/Zoller 2000).

Naturalmente, las elites del Brasil actual no son idénticas a las capas altas de 1822. Se han transformado al igual que las reglas del juego dictadas por ellas: La esclavitud fue abolida en 1888 (por la hija del Emperador), un año más tarde se eliminó la Monarquía (por los dirigentes militares), la “Vieja República” tuvo que ceder en 1930 a una dictadura de modernización (bajo el liderazgo de un anterior ministro de hacienda y gobernador provincial con apoyo de los militares). En 1964 los militares volvieron a hacer un pronunciamiento, en 1985 finalmente desalojaron el poder y se lo entregaron al anterior líder del que fue “su” partido gubernamental. Una “revolución de abajo” nunca ha tenido lugar en el Brasil, los cambios decisivos se realizaron a través de “revoluciones desde arriba” encabezadas por las elites o por lo menos con la participación de fracciones importantes de estas elites. Como se ve, las elites funcionales y de poder del Brasil no se aislaron, sino que ampliaron su base de poder por medio de procesos de cooptación. En cierta manera se podría decir, que compartieron el poder en parte, para conservarlo en su totalidad. En este contexto histórico más amplio debe verse también la asunción del gobierno (y no del poder) por parte del PT en el año 2003.

Ahora bien: el éxito de esta estrategia conlleva al mismo tiempo su problemática. El Brasil hoy forma parte, según todos los informes del Banco Mundial sobre el desarrollo a nivel mundial, de los países con la mayor concentración de ingresos. Este fenómeno se manifiesta de manera espectacular una y otra vez en la lucha del “Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra” (MST), si bien la problemática no abarca solamente el sector agrícola, sino toda la economía. Una auténtica reforma del campo no tenía ninguna posibilidad de realización, tampoco bajo condiciones “democráticas”, ya que los latifundistas representaban también en la *Constituinte* de 1986 al grupo más fuerte. Con las palabras de Sandkötter: En el Brasil no existe un antagonismo entre tradición y modernidad, sino la tradición sobrevive en la modernidad (Sandkötter 1999: 58-68).

A diferencia del México posrevolucionario, la incorporación de las clases medias y el proceso económico de crecimiento y modernización

no fue dirigido por un partido (de Estado). En el Brasil ha habido toda una serie de “revoluciones”, de golpes militares y de cambios de régimen. En casi cada década nueva hubo también partidos nuevos, y en períodos de tiempo bastante más cortos, políticos cambiaban de un partido a otro (Chacon 1998; Schmitt 2000). Pero detrás de esta fachada de intranquilidad política y de una supuesta discontinuidad reinaba, desde el punto de vista estructural y personal, una continuidad que casi podría ser denominada aterradora: Independientemente del tipo de régimen, se encuentran, a lo largo de las últimas décadas, siempre los mismos nombres y apellidos en las posiciones directoras, frecuentemente ya en la segunda y tercera generación: José Sarney (y sus hijos), Jader Barbalho, Marco Maciel y Antônio Carlos Magalhães (con hijos y nietos) en el Nordeste, Jorge Bornhausen con su familia en el Sur, etc. Naturalmente, la legitimación de funciones políticas no se realiza a través del linaje, sino por medio de elecciones democráticas que entretanto pueden ser llamadas “limpias”. Los sucesores de la vieja elite feudal y esclavista son elegidos directamente, si lo desean, pero en mayor medida aún deciden quién en su lugar será elegido.

Dominar o poder hacer uso a discreción de los medios locales, de los periódicos, de las estaciones de radio y ante todo de televisión, desde hace tiempo es más importante para conquistar y conservar el poder que el tradicional clientelismo rural. Si bien los *donos do poder* del Brasil siguen siendo terratenientes, su influencia económica y su poder político se basan, hoy en día, en bancos y cadenas comerciales, en supermercados y en participaciones en empresas industriales. Además, la sobre-representación de los estados menos desarrollados del nordeste brasileño en la Cámara de Diputados y en el Senado –allí, cada estado tiene tres senadores, independientemente de su población– refuerza todavía más la influencia de las elites regionales conservadoras del nordeste sobre la política nacional. Timothy J. Power constató el dilema de la joven democracia brasileña después de 1985 al decir, que democracia no fue posible sin las fuerzas políticas del pasado autoritario, pero que su exagerada presencia imposibilita al mismo tiempo todo tipo de cambio. “Conservative democratization in Brazil has not facilitated but rather hindered the process of democratic consolidation” (Power 2000: 16).

A nivel local, de estado y nacional estos “viejos” nombres y apellidos siguen, pues, estando representados; pero a ellos han venido a

sumarse los nombres de inmigrantes, de arribistas de la mediana empresa y, más recientemente, de trabajadores y sindicalistas que hace veinticinco años todavía fueron perseguidos físicamente. La elite brasileña nunca ha practicado el principio del “closed shop”, sino que siempre se ha abierto algo cuando la presión social se hizo demasiado fuerte. Y esta estrategia de inclusión impidió en gran manera la pérdida del control. Pero si parte de la elite era de la opinión que estaban a punto de perder el control, intervinieron los militares “quirúrgicamente” como *poder moderador*.

En el Brasil, los militares jugaron, en el escenario político, por mucho más tiempo un papel importante que en México, lo que se debía al hecho que entre 1964 y 1985 los presidentes provinieron de sus filas. Incluso para que fuera aceptada la presidencia del “socialdemócrata” Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) todavía era importante, que –siendo, en los años sesenta, todavía un disidente y fugitivo político– proviniera de una tradicional familia de militares.

Por otro lado, incluso el poder de los militares topó con unos límites durante su dictadura: sus intentos de modernización quedaron sin éxito en los sectores, donde hubieran perjudicado seriamente intereses vitales de las elites regionales de poder, bien sea en el marco de una reforma agraria, de proyectos de irrigación o de política industrial. Sin la cooperación de las elites brasileñas civiles, tampoco los generales estaban en condiciones de actuar exitosamente.

Es de dudar que a la última apertura política siga un cambio de las estructuras sociales a nivel nacional, para cumplir con las expectativas de los electores del Partido dos Trabalhadores. Momentáneamente, nada hace esperar que la futura participación en el Brasil vaya más allá de lo que se entiende bajo “democratización” también en otras partes de América Latina: una participación de las cargas sociales de las que se exonera actualmente ante todo a las capas medias. La proverbial persistencia de las viejas elites todavía no ha llegado a su fin en el Brasil, y habrá que esperar si en un futuro próximo seguirá habiendo “cambio a través de elites”, o si este modelo no será reemplazado alguna vez por un verdadero cambio de elite. La actual política no sugiere esta alternativa: El discurso practicado por el Partido dos Trabalhadores actualmente acerca de *inclusão social* es más bien una continuación de la política de *Lula light* del año 2002 que el comienzo de un cambio estructural (Sachs 2004; Schelsky 2005).

#### 4. Países andinos

Contemplado desde la perspectiva de las elites de poder latinoamericanas, los últimos dos siglos han sido una historia muy exitosa. Por otro lado, sería conveniente no sobreestimar las posibilidades de supervivencia de las elites “viejas” en América Latina. Mientras que en México y en el Brasil el proceso de apertura política se desarrolla todavía de manera controlada —en cierta manera, se trata de un paso más en el marco de un largo proceso de cooptación—, en el espacio andino (con excepción de Chile) las elites políticas parece que ya no están en condiciones de controlar el juego político. Amenaza una pérdida de control por parte de las tradicionales elites blancas que se diferencian de las poblaciones de “sus” países no sólo desde el punto de vista político y económico, sino también étnico.

En Venezuela, el autoproclamado “bolivarismo” del presidente Hugo Chávez ha eliminado a través de elecciones y plebiscitos, formalmente pues de manera democrática, la democracia establecida desde 1959 y que con su sistema bipartidista parecía ser estable. Chávez tiene la ventaja de poder hacer uso para su versión del populismo de la riqueza petrolera del país, lo cual es un elemento de estabilización excepcional que no existe en otras partes. Su política de movilización de masas dirigida contra las elites en la economía y la política que le son adversas, contradice completamente al populismo “clásico”, interesado ante todo en ejercer el control. Mientras esté en condiciones de seguir recibiendo el apoyo de los militares en esta vía pseudorrevolucionaria y mientras los precios del petróleo se mantengan altos, sus adversarios apenas pueden hacer algo contra él.

Habrà que ver si en el caso de Venezuela de verdad tiene lugar un cambio a través de elites (en este caso: militares). Mientras que el populismo “clásico” quería y debía controlar el cambio social, el presidente Chávez tiene decididamente la pretensión de redistribuir las riquezas desde arriba hacia abajo. En caso de tener éxito, el consecuente desplazamiento del poder de los *políticos*, que gobernaban con presidentes provenientes de las filas de AD (auto-proclamada social-demócrata) y COPEI (de las filas de la democracia cristiana), significaría un verdadero cambio de elites. No es de extrañar, pues, que Chávez sea la persona más odiada por sus adversarios.



En Ecuador, Perú y Bolivia la permanente movilización política de la población indígena y la confrontación de intereses locales de las elites ha interrumpido en los últimos años el monopolio de poder de las tradicionales oligarquías blancas. Ya no son válidos los anteriores mecanismos de disciplinamiento que consistían en pan (manteniendo artificialmente el nivel de vida con siempre más deudas del Estado) y palo (golpes militares); las variaciones populistas y personalistas sobre el consabido tema de preservación del poder pierden rápidamente atractivo, lo que ejemplifica la retahíla de presidentes en Ecuador, pero también en Bolivia y Perú. E incluso los fomentadores profesionales de la democracia en fundaciones alemanas, públicamente entretanto se muestran temerosos sobre cómo podría votar la población de Bolivia, contemplando el ascenso político que ha tomado Evo Morales (Laserna 2005: 13). Amenaza una total pérdida de control por parte de las tradicionales elites políticas, y parece que no surge ningún Hugo Banzer (el Banzer del año 1971) para impedirlo.

Los nuevos movimientos sociales en los países andinos irritan, por su dinamismo, a los observadores y científicos sociales. Estos incluso constatan un “agotamiento” de la democracia y advierten de la retórica populista de las nuevas fuerzas étnicas: “El discurso es una herramienta que frecuentemente oculta motivaciones y resultados reales, y que ya ha engañado a más de un analista” (Laserna: 2005: 14). Objetivamente, esta afirmación es correcta, ya que el discurso de las elites políticas latinoamericanas tradicionalmente ha servido siempre mucho más para ocultar la realidad que para su esclarecimiento. Pero dirigir este reproche explícitamente a las nuevas elites que están surgiendo y no en primer lugar a las elites tradicionales, no es muestra de agudeza analítica por parte del observador citado. En un futuro habrá que contar, y no solamente en los países andinos, con que recetas políticas y económicas, impuestas desde fuera, no sean aceptadas por la mayoría democrática.

Una estrategia inteligente tendente a evitar conflictos no debiera apuntar a excluir de nuevo a estos grupos sociales, sino a incluirlos activamente en la respectiva política nacional, como ya fue practicado en los casos de México y Brasil. Pero esto significaría repartir el poder y los recursos, y muchos políticos en la zona andina parecen todavía no estar dispuestos a dar este paso.

Da la impresión que en la región andina el modelo de una concentración cada vez mayor de ingresos y riquezas con una participación política sólo parcial de las capas medias ha llegado a su fin. La crisis que se presenta públicamente como guerra de guerrilla o guerra de drogas, desde hace tiempo abarca a las sociedades en su totalidad. Por el alto grado de movilización política, el viejo mecanismo de represión (militar) y de reformas parciales ha sido interrumpido.

La falta de reformas sociales sustanciales por parte de las elites y la confianza de estas elites, apoyada además desde fuera, en las “reformas” neoliberales (reformas, que en Ecuador incluso condujeron a la dolarización de la economía), podrían tener resultados negativos en el espacio andino. Por primera vez, una contra-elite (fundada también visiblemente en la etnia) podría obligar a realizar una modernización y conducir a una participación en la economía nacional que hasta ahora sólo fue concebida desde arriba en dosis a lo sumo homeopáticas.

## 5. Consideraciones finales

La pregunta inicial de este ensayo rezaba: ¿Cambio a través de elites? Después de lo expuesto se puede resumir que las elites latinoamericanas a lo largo de los últimos cien años fomentaron una transformación parcial y siempre controlada políticamente, junto a una fuerte modernización económica “desde arriba”, pero siempre con la idea fundamental de mantenerse en el poder. Por lo tanto, practicaron la modernización económica en su propio interés; en muchos casos, para estas elites se diluyeron las diferencias entre intereses de “Estado” e intereses de la clase poseedora que regía el Estado. En muchas sociedades latinoamericanas, las reflexiones de Elsenhans acerca de la clase estatal cleptocrática siguen siendo válidas de manera drástica hasta hoy en día (Elsenhans 1984: 121). Pero en ningún caso fue admitido un cambio estructural social, tampoco se admitió una pérdida de control político. (El caso excepcional latinoamericano, el de Cuba, no puede ser tratado aquí en detalle.) La meta de esta política fue, es y por de pronto seguirá siendo la conservación del poder admitiendo y realizando ciertas reformas parciales y controladas.

Este tipo de modernización sólo ha sido parcial, tanto en los distintos países como si se contempla el continente en su totalidad. Por eso, América Latina ha tenido un desarrollo socio-económico muy

desigual, según de qué país se hable. Fueron justamente países con supuestas revoluciones sociales “exitosas” como Bolivia (1952) y Nicaragua (1979), los que sufrieron un brutal retroceso económico. En todas las estadísticas, el peor desarrollo lo muestra el país que se liberó el primero: Haití. Para estas sociedades, los tradicionales métodos desarrollistas no presentan ningún tipo de solución.

La retórica “democrática” y de “mercado”, practicada conscientemente por las elites desde hace más de veinte años debe ser contemplada como lo que es: parte de una estrategia de aseguramiento, que durante mucho tiempo ha sido exitosa. No se trata de una profesión de fe, asumida con convicción. Para enjuiciar la actual realidad de América Latina y los logros de sus elites, deberían emplearse sólo duros parámetros sociales. Y estos parámetros son inequívocos: La desigualdad social es, hoy en día, en América Latina mayor que nunca. Las economías no han logrado alcanzar el nivel de países industrializados, y tampoco puede observarse un desarrollo que disminuya las distancias sociales.

Ganadores de las reformas de las últimas décadas fueron las elites económicas. El proceso de concentración de las riquezas y de los ingresos experimentó por las privatizaciones y desregulaciones un nuevo clímax. Al contrario, perdedores de este proceso fueron el Estado (en su función directiva y de suministrador de servicios) y las capas medias. Esto se manifestó de manera especialmente radical en Argentina, pero en casi todos los demás países ha habido tendencias similares.

Por lo tanto, de momento queda sin respuesta la pregunta acerca de la futura funcionalidad del sistema dirigido por las elites. El hecho que actualmente el populismo sea activado en América Latina de nuevo como respuesta a la cuestión social, es más bien síntoma de una falta de soluciones viables. Así pues, la pérdida de control por parte de las “viejas” elites en determinados países podría anunciar una transformación de “cambio a través de elites” hacia “cambio de elites”. Los procesos de transformación en Europa Central y del Este pueden ofrecer interesantes ejemplos al respecto.

## Bibliografía

- Adler Lomnitz, Larissa/Gil-Mendieta, Jorge (2004): "El neoliberalismo y los cambios en la elite de poder de México". En: Maihold, Günther (ed.) (2004): *Las Modernidades de México. Espacios, Procesos, Trayectorias*. México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa, pp. 313-332.
- Bazdresch, Carlos/Bucay, Nisso/Loaeza, Soledad/Lustig, Nora (eds.) (1992): *México: Auge, Crisis y Ajuste*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Bernecker, Walther L./Braig, Marianne/Hölz, Karl/Zimmermann, Klaus (eds.) (2004): *Mexiko heute*. Frankfurt/Main: Vervuert.
- Bernecker, Walther L./Pietschmann, Horst/Zoller, Rüdiger (2000): *Eine kleine Geschichte Brasiliens*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Camp, Roderic Ai (1992): *La Formación de un Gobernante*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- (1995): *Mexican Political Biographies, 1935-1993. Third Edition*. Austin: University of Texas Press.
- Chacon, Vamireh (1998): *História dos Partidos Brasileiros*. 3ª ed., Brasília: Ed. UnB.
- Elsenhans, Hartmut (1984): *Nord-Süd-Beziehungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Franke, Uwe (2004): "Parteien und politische Transformation in Mexiko". En: Bernecker, Walther L./Braig, Marianne/Hölz, Karl/Zimmermann, Klaus (eds.): *Mexiko heute*. Frankfurt/Main: Vervuert, pp. 175-198.
- Hernández Rodríguez, Rogelio (1992): "La División de la Elite Política Mexicana". En: Bazdresch, Carlos/Bucay, Nisso/Loaeza, Soledad/Lustig, Nora (eds.): *México: Auge, Crisis y Ajuste*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, pp. 239-266.
- Higley, John/Gunther, Richard (eds.) (1992): *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Knight, Alan (1992): "Mexico's Elite Settlement: Conjuncture and Consequences". En: Higley, John/Gunther, Richard (eds.) (1992): *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 113-145.
- Laserna, Roberto (2005): "Bolivien: Verzehr der Demokratie". En: *Europa – América Latina. Analysen und Berichte*, 19, pp. 6-29.
- Lehr, Volker G. (1981): *Der mexikanische Autoritarismus*. München: Wilhelm Fink Verlag (LAS 8).
- Lipset, Seymour Martin/Solari, Aldo (eds.) (1967): *Elites in Latin America*. London: Oxford University Press.
- Loaeza, Soledad (2000): "México: la rebelión de las elites". En: *Revista Complutense de Historia de América*, 26, pp. 307-326.
- Maihold, Günther (2000): "Mexiko 2000 – das Ende einer Ära". En: *Brennpunkt Lateinamerika*, 13, pp. 129-143.
- (ed.) (2004): *Las Modernidades de México. Espacios, Procesos, Trayectorias*. México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

- Power, Timothy J. (2000): *The Political Right in Postauthoritarian Brazil. Elites, Institutions, and Democratization*. University Park: The Pennsylvania State University Press.
- Sachs, Ignacy (2004): “Inclusão social pelo trabalho decente: oportunidades, obstáculos, políticas públicas”. En: *Estudos Avançados* (São Paulo), 18, 51, pp. 23-50.
- Sandkötter, Stephan (1999): *Modernisierungsforschung in Brasilien*. Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Schelsky, Detlev (2005): “Exklusion und Inklusion – oder die Beziehung Brasiliens zu seinem Nordosten”. En: Sevilla, Rafael/Chiappini, Ligia/Costa, Sérgio/Coy, Martin (eds.): *Brasilien: Zwischen Gerechtigkeit und Ausgrenzung*. Tübingen: CCC, pp. 166-179.
- Schmitt, Rogério (2000): *Partidos políticos no Brasil (1945-2000)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- Scott, Robert E. (1967): “Political Elites and Political Modernization: The Crisis of Transition”. En: Lipset, Seymour Martin/Solari, Aldo (eds.): *Elites in Latin America*. London: Oxford University Press, pp.117-145.
- Sevilla, Rafael/Chiappini, Ligia/Costa, Sérgio/Coy, Martin (eds.) (2005): *Brasilien: Zwischen Gerechtigkeit und Ausgrenzung*. Tübingen: CCC.
- Wasner, Barbara (2004): *Eliten in Europa*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (UTB 2459).